

**Intervención de JOSÉ NUN en las Jornadas monetarias y bancarias 2010,  
organizadas por el Banco Central de la República Argentina**

A los fines de esta presentación y desde la perspectiva que nos brinda nuestro Bicentenario, es posible afirmar que la Argentina ha conocido básicamente tres grandes regímenes sociales de acumulación (y después voy a precisar un poco más qué quiero decir con esto).

El primero de ellos arranca entre 1870 y 1880 y se extiende hasta la Gran Depresión. Su emblema fue sin duda esa tierra feraz de los ganados y las mieses que cantó Lugones en 1910. Pero ya entonces el país tuvo una característica que lo diferenció de los otros cuatro grandes centros agroexportadores: EE UU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Argentina fue el único de los cinco donde los dueños de la tierra controlaron también el poder político. Y esto iba a marcar fuertemente nuestro destino.

Por motivos que luego quedarán más claros, debo añadir que justamente en ese mismo año 1910 se festejó el Centenario de maneras bastante menos pacíficas que las que la retórica de derecha se ha empeñado en evocar. Era entonces Presidente José Figueroa Alcorta, un cordobés escasamente respetado por miembros influyentes de la oligarquía. Esto al punto de que el embajador argentino en Italia, Roque Sáenz Peña, que poco después lo sucedería en la Presidencia, invitó a un periodista (respetable, por cierto) para que viniera mientras él organizaba una gran fiesta en la embajada, a la cual asistió lo más granado de la aristocracia peninsular. A su vez, el prócer de la Argentina de ese momento (y dos veces Presidente), el General Julio A. Roca, eligió irse a París para no estar aquí durante el mes de los festejos. En cuanto a la Unión Cívica Radical - que era el principal partido de la oposición -, recibió orden de su líder, Hipólito Yrigoyen, de que ningún afiliado concurriese a los actos programados para así expresar su repudio a la oligarquía ganadera en el poder. Por último, a comienzos del mes de mayo, el gobierno decretó el estado de sitio porque los anarquistas de la FORA amenazaban con realizar una huelga revolucionaria. Todo esto llevó a un destacado político e intelectual conservador, el riojano Joaquín V. Gonzalez (autor del primer proyecto de Código del Trabajo que conoció el país), a escribir un largo texto que se publicó primero como artículo periodístico y después como libro, titulado La lección de un siglo. ¿Y cuál era esta lección? Que la Argentina se había erigido efectivamente en una nación muy próspera, bendecida por la naturaleza, pero que arrastraba consigo un problema insoluble al que González no vaciló en designar como la *ley histórica de la discordia nacional*. Cada una a su modo, las etapas siguientes se encargarían de confirmar este aserto.

Porque un segundo régimen social de acumulación fue cobrando forma en los años 40. Se trató de la versión local del llamado modelo de industrialización sustitutiva, que con sus altos y sus bajos se extendería hasta mediados de los 70. Sus emblemas fueron, primero, la industria textil y, después, la industria automotriz. En su curso - y sin perjuicio de múltiples avatares sociales y políticos -, ocurrió un crecimiento sustantivo del producto bruto *per cápita* que, según cálculos diversos, se habría expandido en el período entre un 50% y un 67%.

Hacia 1975 se abrió la tercera etapa, guiada por el neoliberalismo. Sus símbolos han venido siendo, por un lado, tres lustros de un auge notable del capital financiero y, por el otro, la soja transgénica. Si fijamos la gran crisis del 2001-2002 como un final todavía provisorio de esta nueva etapa, el balance no puede resultar más negativo. Argentina debe ser, con toda probabilidad, el primer país de Occidente que pasó con tanta nitidez de un sistema fiscal progresivo a otro regresivo. A la vez, el producto bruto *per capita* cayó un 10% y el producto bruto industrial *per cápita* disminuyó un 40%. Ha sido claramente una época de destrucción de la industria nacional, de gran endeudamiento externo, de privatizaciones realizadas en los años '90 a una velocidad desconocida en el resto del mundo, de extranjerización de la economía, de un grave ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres y de un gran aumento del desempleo, del subempleo y de la pobreza.

Un botón de muestra de la índole de las políticas económicas a las cuales me refiero es que terminaron llevando al país a la deflación durante el gobierno de De la Rúa y, sin embargo, las tarifas de los servicios públicos siguieron subiendo porque las privatizaciones establecían que el monto de esas tarifas se regiría por la evolución de la inflación... ¡en los Estados Unidos!

Desde 2003 se inició lo que aun no sabemos si llamar una nueva etapa o, más bien, el *prefacio* de una nueva etapa. Lo cierto es que vivimos tiempos en los cuales la Argentina está conociendo tasas de crecimiento de una magnitud que nunca tuvo antes. La Presidenta confirmó aquí esta mañana que la tasa de este año va a estar en un 9%, continuando una tendencia que comenzó luego de la crisis del 2002. Ha habido una recuperación espectacular de la economía, sin apoyo crediticio del exterior, pagando la mayor parte de la deuda contraída desde 1976, y con un descenso muy importante del desempleo, del subempleo y de la pobreza. No voy a abundar en este punto, que fue amplia y elocuentemente desarrollado hoy tanto por Mercedes Marcó del Pont como por la Presidenta. Deseo detenerme, en cambio, en un hecho que creo importante resaltar.

Para ello, voy a hacer pie en la excelente presentación que acaba de realizar Ricardo French Davis, por tantos motivos digna de encomio. Sólo que, vicio de sociólogo, me sorprendió que en su análisis faltara el sujeto. Parecía (o, al menos, así me sonó a mí) que las políticas económicas que examinó las hubiera instalado una fuerza indeterminada e indeterminable: *se pusieron los controles, se sacaron los controles, se hizo esto, se hizo aquello*. Claro que uno sabe (y Ricardo también) que alguien puso o no puso, hizo o no hizo; y ese alguien representa siempre intereses concretos y, por añadidura, conflictivos. Estamos hablando de actores económicos, sociales, políticos e ideológicos que logran imponerse y subordinar a otros, con niveles variables de aceptación.

Si enumeré antes las etapas recorridas hasta aquí por el país fue para poder mostrar ahora que, en nuestro caso, el pasaje de una a otra resultó invariablemente traumático, actualizando cada vez la vigencia de aquella ley que formulara Joaquín V. González. Así, el modelo que instituyó la generación del 80 tuvo como una de sus precondiciones básicas la "conquista del desierto" (que no estaba para nada desierto) encabezada por Roca, que liquidó o trasladó sangrientamente hacia el sur patagónico a los pueblos originarios existentes en la pampa y repartió en un par de años la totalidad de sus tierras entre quienes se convertirían de este modo en miembros conspicuos de la oligarquía terrateniente. Nada sucedió por milagro. Luego, a comienzos del nuevo siglo, se ingresó

a un período de altísima conflictividad social (enfrentamientos entre sectores oligárquicos; conspiraciones radicales; huelgas obreras; hechos de violencia; etc.) que desembocaría finalmente en la ley del voto masculino secreto y obligatorio de 1912 que, cuatro años más tarde, le iba a permitir a la Unión Cívica Radical llegar al gobierno. Agregó que esto implicó un cambio del *régimen político de gobierno* pero no del *régimen social de acumulación*.

Por su parte, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones se inició tímidamente en los años '30 como consecuencia de la Gran Depresión y se afianzó nada más y nada menos que con el ascenso al poder de Juan Domingo Perón. Y no por casualidad uno de los símbolos mayores de este cambio fue la jornada de intensa movilización popular ocurrida el 17 de octubre de 1945. Hubo una transformación política y social de una rapidez y profundidad considerables, signada por el enfrentamiento del gobierno y sus aliados con la oligarquía y con el capital extranjero. Por eso también a ese momento lo estoy llamando traumático. Más aun: la oposición al peronismo fue durísima y culminaría en el golpe militar de 1955, que lo derrocó y proscribió. Resulta significativo que tanto en los '80 como a partir del '45 se apelara a la misma (e irreconciliable) dicotomía: *civilización o barbarie*; y que, en ambos casos, los sectores económicamente más poderosos se adjudicaran el título de *civilizados*.

Según se sabe, tampoco fue pacífico el encumbramiento del neoliberalismo. Me limito a recordar que nuestra tercera etapa llegó de la mano del Rodrigazo (respaldado por el lopezreguismo y los crímenes de la Triple A) y se consolidó a partir de 1976 en el marco de la dictadura más brutal que haya conocido un país donde, como vimos, la concordia nunca ha sido precisamente una tradición.

Es claro que un rapidísimo vistazo a la historia de los Estados Unidos nos deja menos solos de lo que podría suponerse. Si aquí la unificación del país que abrió paso al modelo agroexportador resultó de la campaña militar de Roca, ¿no tuvieron allí consecuencias similares (y no menos violentas) la marcha hacia el Oeste, el exterminio de los indios y la guerra de Secesión? Varias décadas más tarde, la crisis del '30 y luego el segundo *New Deal* fueron los antecedentes del pasaje a una economía francamente industrial. Pero digo deliberadamente *antecedentes* porque las vacilaciones de Roosevelt hicieron que la formidable expansión industrial norteamericana recién se afirmase en verdad durante la Segunda Guerra Mundial. Vaya entonces si la transición definitiva a esa etapa fue traumática. Lo mismo sucedió, a otro nivel, con el avance del neoliberalismo y la puesta en marcha del denominado “modelo de Wall Street”. El gran capital lanzó desde los '70 una ofensiva contra el movimiento sindical sin paralelo en Occidente, la cual tuvo en Ronald Reagan a uno de sus paladines más exitosos. No por azar hoy la contribución de la industria manufacturera al PBI ha descendido a apenas el 11,5% y los Estados Unidos intentan completar ahora su transición desde una economía industrial a una economía de servicios. ¿Es acaso ajena a este proceso la profunda crisis que se abrió en el 2008 y que viene impulsando esa “caída libre” de la que habla Stiglitz en su último libro? ¿O el propio escalofriante crecimiento de la ultraderecha norteamericana, que arrastra también a buena parte de la derecha moderada?

Con esto llego a la pregunta incómoda que quería plantear. En vista de los cuantiosos intereses que se hallan en juego y dadas nuestras tradiciones, ¿parece concebible que la Argentina pueda entrar mansamente a un cuarto estadio de desarrollo económico con instituciones sanas y una sustancial declinación de la desigualdad *sin atravesar nuevos*

*momentos traumáticos? ¿Y, sobre todo, sin poner en riesgo ni agravar las limitaciones de un régimen democrático al que con tantas dificultades se llegó en 1983?*

El escaso tiempo de que dispongo sólo me permite esbozar algunos rudimentos de una respuesta que, por desgracia, temo negativa. Ante todo, conviene distinguir entre dos usos muy diferentes de la palabra *democracia*. Uno remite a la clásica noción ateniense según la cual la democracia designa a un modo de vida; el otro poco tiene que ver con éste, nombra sólo a una forma de gobierno – la democracia liberal o representativa - y es el que acabó imponiéndose en Occidente luego de la Segunda Guerra Mundial. Vale la pena recordar que, en los años '20, con mucha buena voluntad, existían unas 35 democracias liberales en el mundo. En los años '30 ese número se había reducido ya a alrededor de 17; y a principios de los años '40, la cifra no superaba la docena. Las alternativas que aparecían entonces como dominantes eran el fascismo y el comunismo.

En la posguerra, se produjo una primera oleada de transiciones a la democracia representativa en Alemania Occidental, en Austria y en Italia. Tanto en estos tres casos como en los de las democracias ya establecidas bajó notoriamente la desigualdad, con lo cual la idea de ciudadanía incorporaba un elemento que había sintetizado muy bien Leon Blum: “*Toda sociedad que quiera asegurarle al hombre la libertad tiene que empezar por garantizarle la existencia*”. Los principales países de Occidente habían ingresado, cada cual a su modo, en los llamados “30 años gloriosos” de los *estados del bienestar*. Pero cuando ocurrió la segunda oleada de transiciones a la democracia liberal en los años '70 – que incluyó a Grecia, a España y a Portugal – esa bonanza ya había comenzado a disiparse, socavada por las crisis petroleras y sus efectos. No obstante, los tres países mencionados hicieron un enorme esfuerzo por integrar a los sectores más desposeídos. En España, por ejemplo, la desigualdad se redujo en un 50%. Traigo todo esto a colación porque la distancia de tales experiencias con las transiciones a la democracia sucedidas en América Latina es más que evidente. En su mayoría (Argentina incluida), éstas tuvieron lugar en los años '80, la famosa *década perdida*, durante la cual hubo un generalizado retroceso económico con redistribución regresiva del ingreso.

Con lo que retorno a las dos nociones de democracia. Cuando, en 1942, ese gran economista que fue Joseph Schumpeter escribe Capitalismo, socialismo y democracia y llega al punto donde tiene que conceptualizar la democracia, se encuentra con que no hay definiciones que lo satisfagan: por un lado, los griegos no habían teorizado su experiencia; y por el otro, los modernos elaboraron sus teorías cuando las prácticas democráticas o no existían o estaban apenas en sus inicios. Schumpeter plantea, entonces, que la democracia contemporánea nada tiene que ver con la ateniense y es simplemente un procedimiento para la renovación periódica de las élites gobernantes: según su conocida analogía, así como en el mercado económico la gente elige y paga con dinero los bienes que compra, en el mercado político se ofrecen partidos, programas y candidatos y los ciudadanos ejercen sus opciones utilizando para ello el voto en vez de la moneda. Con la diferencia, claro, de que uno puede devolver la mercancía que compra si no le gusta mientras que, en este otro caso, para cambiarla debe aguardar hasta las próximas elecciones.

*¿A que estoy tratando de llegar? A que - sin perjuicio de los diversos refinamientos y agregados que se le hicieron-, la amplia vigencia adquirida por este uso schumpeteriano de la palabra implica que decir hoy democracia no sea lo mismo que*

*decir buen gobierno.* La democracia liberal entendida de esta forma, y no como un modo de vida, es un régimen institucional organizado en partidos políticos, con división de poderes -distinta en los países parlamentaristas que en los presidencialistas - y elección periódica de las autoridades. El gambito ideológico consiste en confundir intencionalmente los dos significados, con lo cual se oscurece el hecho decisivo de que las democracias contemporáneas son condiciones necesarias pero no suficientes para que haya un buen gobierno. Porque el buen gobierno debe asegurar, entre otras cosas, el crecimiento con justicia social, la primacía de la ley, la educación, la salud, la solidez y la transparencia de las instituciones, las libertades públicas y una brecha de desigualdad que sea cada vez menor.

Hay pruebas abundantes de que aquí y en otras partes, a pesar del establecimiento de democracias representativas, el auge del neoliberalismo ha hecho que los buenos gobiernos brillaran por su ausencia o debiesen y deban enfrentar graves dificultades para consolidarse y para atender lo menos desparejamente posible una multiplicidad de demandas insatisfechas. Cité antes el libro que Joseph Stiglitz ha publicado este año. Después de demostrar que los mercados ni se autorregulan ni son en general eficientes, termina diciendo con alivio que “*El Consenso de Washington y la ideología fundamentalista de mercado que lo sustentaba han muerto*”. Ojalá fuera así. En nuestro país, por lo pronto, todavía están ambos vivitos y coleando y uno de los serios problemas actuales es que pugnan por hacerse del poder político. Por eso asumen tanta importancia las preguntas que antes dejé pendientes.

Es aquí que desearía volver por un instante al concepto de *régimen social de acumulación*, que introduje hace más de 20 años para referirme al conjunto de las creencias, de las instituciones y de las prácticas que inciden sobre el proceso de acumulación de capital, entendiendo a éste como un proceso microeconómico de generación de ganancias y de toma de decisiones de inversión que requiere de ese contexto más amplio para poder funcionar adecuadamente. Subrayo que todo *régimen social de acumulación* es contradictorio y provoca antagonismos de magnitud variable que pueden terminar conduciendo a su decadencia y transformación. Esto vuelve bastante llamativo el arraigo ideológico que mantiene el neoliberalismo a pesar de sus reiterados fracasos. Son muchos y muy importantes los actores sociales que – a sabiendas o no - siguen hablando su lenguaje y constituyendo así la realidad en la cual vivimos. Evidentemente no es un mero producto de la inercia sino de la acción intensa y sostenida de poderosos grupos de presión nacionales e internacionales y de sus epígonos, que controlan, entre otras cosas, los mayores medios de comunicación.

En este sentido, recordemos que en la teoría neoclásica que nutre al neoliberalismo no existe preocupación alguna por la distribución. Y que un economista tan influyente como von Hayek sostenía que hablar de “distribución justa” era una ocupación propia de profetas y de mentirosos pues la asignación correcta de los recursos le corresponde siempre al mercado, que dispone para ello de toda la información necesaria. Es por eso que, dadas tales premisas, durante muchos años no hubo siquiera espacio para crear un seguro de desempleo: la Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo, mantuvo como doctrina firme hasta 1937 que el seguro de desempleo o el salario mínimo violaban el derecho de propiedad *que era anterior a la regulación política*, posición que ha vuelto ahora a resonar en ilustrados discursos que circulan no sólo en nuestro país.

Peor aun. La teoría neoclásica tematizó el *trickle down effect*, el efecto *goteo*, para postular que, al cabo de un tiempo, un crecimiento sostenido necesariamente va a *gotear* en nuevos puestos de trabajo y en mejores salarios. Sólo que en América Latina se le enmendó la plana a la teoría mediante una ingeniosa tramoya que se repite a diario. Los defensores del neoliberalismo advirtieron que no podían subirse a una tribuna y prometer nada más que un eventual goteo a cambio de darle rienda libre al mercado. Entonces, sin justificación alguna, optaron por trasvasar de las teorías de la innovación tecnológica la idea de un *spillover effect* y, a partir de ese momento, modificaron los términos y nos han venido bombardeando con un imaginario efecto *derrame*, que nunca dió indicio alguno de concretarse.

De manera similar, se apeló a una traducción capciosa de los que en inglés se denominan *fiscal havens*. Noten que digo *havens*, que significa *guaridas de piratas*. Bastó agregar una “e” para convertirlos en *fiscal heavens*, esto es, en *paraísos fiscales*. Obviamente, lo otro de una guarida es un lugar decente, mientras que lo otro del paraíso es el infierno. Un reciente editorial del diario *La Nación*, por ejemplo, justifica en estos términos a quienes sacan capitales fuera del país porque, dado que la Argentina es un infierno, se comprende que busquen refugio en “paraísos fiscales”.

Un último ejemplo para poner de manifiesto hasta dónde un *régimen social de acumulación* determinado logra impregnar el lenguaje de sentido común. Aludo a la palabra *intervención*, que nos coloca hábil e inmediatamente en un espacio semántico donde se da por sentado que la economía constituye un dominio autónomo y autosuficiente. De esta forma, cada vez que el gobierno trata de regularlo o de implementar políticas económicas de otro signo, estaría “interviniendo”, como si el hecho de que se obstruyan o vedan las medidas objetadas no fuera también, para usar la misma terminología, un modo de “intervención”. Basta dar un paso más para preguntarse si acaso podrían existir los mercados o los contratos en ausencia de leyes, de costumbres, de tribunales, de reglamentaciones, etc., que los precedieran e hiciesen factibles. La respuesta negativa está fuera de discusión pero todo indica que, por el momento, no alcanza. En julio de 2009, por ejemplo, la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), que en esa fecha agrupaba a los dueños y titulares del conjunto de las empresas más grandes y concentradas que operan en el país, dio a conocer un documento criticando cualquier “intervención” estatal dirigida a redistribuir el ingreso o a promover el desarrollo mediante instrumentos públicos. Con el mercado sobra.

¡Qué decir de la gran reforma fiscal que muchos entendemos indispensable y que tanto cuesta llevar a la práctica! Ya Galbraith observaba que nada contribuye tanto a la tranquilidad social como el grito de los ricos cuando tienen que pagar impuestos. Hablo, para ser algo más parsimonioso, del denominado “multiplicador de presupuesto equilibrado”, del aumento de los gravámenes a los ricos para financiar de esta manera el gasto público y promover un mayor bienestar general. Nótese que en nuestro país (y en el resto de América Latina) todos se compadecen de la suerte de los pobres. La derecha, el centro y la izquierda. Sólo que aquí y en otras partes, *el principal problema no son hoy los pobres sino los ricos*. Hemos llegado a un punto en el cual hace falta reducir lo más rápidamente posible los altísimos niveles de desigualdad que existen no únicamente en la distribución del ingreso sino también de la riqueza. Se entiende que el coro neoliberal grite por anticipado y apele a todos los recursos de que dispone (que son considerables) para impedirlo.

De ahí que cualquier intento del actual gobierno en esa dirección provoque una crítica de una violencia inusitada incluso en un país siempre propenso al conflicto. No digo que, en esta materia, no se cometan errores o que el oficialismo no se haya involucrado en varias apuestas y alianzas políticamente discutibles. Sí digo que la furia opositora se desata sin concesiones cuando, como viene ocurriendo en los últimos años, las medidas que se promueven (desde la asignación universal por hijo hasta la proyectada participación de los trabajadores en las ganancias, pasando por la desprivatización del sistema previsional) pretenden transformar núcleos importantes del régimen social de acumulación fuertemente concentrado, extranjerizado y excluyente todavía en vigencia. Es difícil suponer que en esta situación resulte factible recuperar las riendas en forma plena de maneras poco traumáticas, lo cual remite de nuevo a mis interrogantes anteriores.

En tales condiciones, es cuando menos tramposo responsabilizar sólo al oficialismo por la lógica amigo/enemigo que domina el debate público. Pocas veces en nuestra historia ha habido más libertad de expresión que ahora; y nunca antes un gobierno ha recibido tantos insultos, vituperios y descalificaciones como el actual. Mientras, la economía sortea con éxito la crisis que se propagó desde los Estados Unidos en 2008 y continúa creciendo a las tasas que ustedes escucharon esta mañana. Han cambiado profundamente la Argentina y el mundo. Y, sin embargo, la virulencia de la lucha política vuelve a confirmar la validez de esa ley histórica de la discordia nacional que Joaquín V. González formulara hace cien años. Por eso, construir en nuestro suelo un desarrollo con equidad exige más que en otros lugares que el buen gobierno, para serlo, tenga también éxito en la durísima y compleja tarea de administrar la discordia sin ceder en sus objetivos.